

los mismos jueces; y á esto conduce ineludiblemente la teoría que atribuye al artículo 16 el haber usado la palabra *competente* en el sentido que venimos suponiendo. Esa palabra se refiere á la *legitimidad* ó al *fuero específico* de cada funcionario: si lo primero, ya no hay cuestion, ni dificultades; si lo segundo, entónces toda *competencia* (porque la Constitucion no distingue sino que habla en general de *autoridad incompetente*) debe ser objeto de garantía individual y puede ser materia de amparo, lo mismo la incompetencia de un juez de Distrito en sus relaciones con un juez comun, que las de un juez de Estado respecto de otro juez del mismo Estado, que la decision sobre si es procedente ó no una recusacion. Cualquiera distincion que á ese propósito se establezca es arbitraria, porque, repito, la Constitucion no distingue entre unas y otras *incompetencias*.

Nunca, sin embargo, en ningun tiempo, la Suprema Corte ha aceptado semejante inteligencia del artículo 16

Si se rechazan ambos significados de la palabra *competencia*, el que se refiere á la *legitimidad* y el que se refiere al *fuero recíproco*, entónces resulta que el artículo 16 nada dijo, que á nada conduce, que es letra muerta, que para nada sirve, que usó de palabras vanas, sin aplicacion ni objeto. La solucion de esas dificultades, la explicacion de ese enigma, el despejo de esa incógnita, se encuentra en el texto mismo de la Constitucion, se halla fácilmente con sólo no forzar el espíritu de la Carta política sino seguir fielmente sus naturales propósitos é intenciones.

La Constitucion garantiza la *legitimidad* de todos los poderes públicos, de todas las autoridades; pero las *condiciones de esa legitimidad* son de dos especies: unas están fijadas en el mismo Código político, otras están abandonadas á la reglamentacion de las leyes secundarias. La

Constitucion dice, por ejemplo, que para ser Presidente de la República, Magistrado de la Corte, Secretario de Estado, se requiere ser varon, de tal edad, etc.; hé aquí *condiciones de legitimidad* fijadas, ordenadas, establecidas en la misma Constitucion que ninguna ley secundaria puede suprimir, ni dispensar. La Constitucion supone que ha de haber jueces, agentes administrativos, autoridades municipales; pero no fija, no pone bajo la garantía de preceptos constitucionales *las condiciones de legitimidad* de esos funcionarios, sino que deja en amplia y entera libertad al legislador para reglamentar, organizar esas autoridades, fijar su competencia y determinar las condiciones de su legitimidad. La ley secundaria que declarase hábil á una mujer para ser juez comun, á un niño para ser munícipe, á un condenado á pena infamante para ser magistrado, seria irracional, absurda, desatinada; pero no anticonstitucional, no atentatoria de garantías individuales; porque el Código político no hizo entrar bajo el dominio de sus preceptos las condiciones de habilidad de esos funcionarios.

Si en lo que podemos llamar esfera extraconstitucional; si en lo que no es objeto de preceptos del Código político; si en lo que éste no impone restricciones al legislador, la ley secundaria conserva amplia libertad para establecer las autoridades ó funcionarios públicos, sus condiciones de legitimidad, los medios de su eleccion ó nombramiento, las formas en que debe decidirse sobre la procedencia de su jurisdiccion; si esto es cierto, entónces resulta que esa ley es libre para declarar que una autoridad ilegítima será legítima, cuando no se reclame esa legitimidad, cuando otra autoridad haya decidido que es legítima, cuando hayan existido hechos consumados, cuando la cosa juzgada haya cubierto vicios existentes en realidad. La ley que sin anticonstitucionali-



dad, aunque irracionalmente, puede declarar juez á un niño, magistrado á una mujer, presidente del Ayuntamiento á un demente, puede, con mayoría de razon, declarar que las personas que tengan esos vicios quedan rehabilitadas por la cosa juzgada, por la decision de funcionarios determinados, por el silencio de los que consientan en la jurisdiccion de esas personas. Todo esto puede hacer la ley secundaria; porque, repito, mientras no pase de irracional á anticonstitucional, mientras no viole preceptos del Código político, mientras éste haya dejado amplia libertad al legislador en esas materias, las decisiones de esas leyes secundarias son bastantes para legitimar todo poder público, ellas son el criterio supremo de esa legitimidad, y la Constitucion no tiene interes ninguno en ella.

En esta materia sucede lo mismo que en materia de leyes civiles y penales y de fallos judiciales; éstos pueden ser absurdos, irracionales, desatinados, sin ser anticonstitucionales. Hay en los Estados regidos por la legislacion española algunos en que se castiga la sodomía, la bestialidad, el suicidio, la prostitucion; hay unos en que se permiten juegos de azar, otros en que se prohíben, unos en que se permiten los toros, otros en que se condena esa diversion. En materias de derecho civil, hay ó puede haber Estados en que se fije la tasa ó intereses del dinero, en que no se admite el sistema de publicidad en las hipotecas, etc., etc. Hay ó puede haber fallos judiciales notoriamente injustos, ilegales y nulos; pero si esas leyes conceden la autoridad de cosa juzgada á éstos y si ellas con sus injustas é irracionales prescripciones del orden civil y criminal no afectan los principios constitucionales, esas injusticias, esas irracionalidades, están fuera de la proteccion del Código político y no pueden ser objeto del amparo constitucional.

Pues lo mismo, precisamente lo mismo, sucede con las leyes sobre legitimidad de funcionarios públicos: la Constitucion garantiza que nadie puede ser molestado sino por mandamiento de *autoridad competente*; pero para calificar si es ó no autoridad competente, aunque es requisito indispensable que haya una ley, esa ley, es el criterio supremo cuando la Constitucion ha abandonado á ella el fijar las condiciones de esa legitimidad y competencia. La ley que declara que es autoridad legítima aquella que es declarada tal, por determinada autoridad, es bastante para llenar las exigencias del art. 16, siempre que, por otra parte, esa ley á su turno no sea ilegítima, no sea nula, no sea anticonstitucional.

Estas explicaciones que yo formulo en términos jurídicos, en el lenguaje de la jurisprudencia comun, son las mismas que en otra forma, en el lenguaje del derecho constitucional, han amplificado al comentar el principio contenido en el art. 16 los publicistas mexicanos y extranjeros.

«Uno de los impugnadores del amparo (dice el Lic. Emilio Velasco) ha sostenido que la incompetencia no es la legitimidad, y para acreditarlo así, ha invocado doctrinas jurídicas sobre fuero y juez competente. Un juez, ha dicho, es legítimo si su nombramiento se deriva de quien tiene facultades para nombrarlo; sin embargo, en ciertos casos será incompetente. En este raciocinio se confunde la competencia y jurisdiccion políticas con la competencia y jurisdiccion judiciales, lo que está perfectamente distinguido en la Constitucion. Esta, en lo que toca á la competencia judicial, establece que la Corte de Justicia dirimirá las que se susciten entre los Tribunales de la Federacion, entre éstos y los de los Estados, ó entre los de un Estado y los del otro. De manera que la forma principal de las competencias judiciales,



está expresamente definida en artículos de la Constitución diversos del 16. . . . . Este tampoco se refiere á jueces ó tribunales especiales ó por comision, porque ellos han sido abolidos por otros preceptos (arts. 13 y 14) diferentes del 16. De esto se deriva que el último de dichos artículos, en lo que toca á competencia de autoridad, se refiere más particularmente á la competencia política. Dos son los caracteres especiales de ésta; el primero se dirige á hacer efectiva la division de los poderes en la Federacion y en los Estados. . . . . El segundo carácter de la competencia política tiene por objeto impedir que se levanten autoridades de hecho. El que no es autoridad legítima, se ha dicho, no es autoridad; de consiguiente no se puede calificar si es ó no competente. Ese principio no es exacto. En derecho público se reconocen autoridades de hecho y autoridades de derecho; el que ilegalmente ejerce una autoridad no es una autoridad de *jure*, pero sí de *facto*, y en este caso, el que promueve un amparo se encamina á que no le gobierne una autoridad de hecho, porque ésta carece de jurisdiccion política legal.»

«No (dice el Sr. Iglesias), jamas incurrirá la Corte en el absurdo de creer que está en su caprichoso arbitrio considerar y declarar la ilegitimidad de las autoridades de los Estados. Ni siquiera presumirá nunca que cabe en sus facultades tomar en cuenta las ilegitimidades de todo género de que aquellas puedan adolecer. Lo que se presenta con el carácter de regla general, es, por el contrario, una excepcion limitada á un solo caso. La doctrina de la Corte se reduce á consignar el principio de que cabe en sus atribuciones desconocer como legítima la autoridad de un Estado, cuando está funcionando sin que ella haya sido elevada al poder en virtud del voto popular, por no haber habido elecciones debiendo

haberlas; ó cuando en las elecciones habidas se ha infringido la Constitución federal; ó cuando en ellas no se ha procedido en *los términos establecidos por las Constituciones particulares de los Estados* en materia electoral. Aunque por via de explicacion se ponen aquí tres casos distintos, en realidad están reducidos á uno solo, que es el de infraccion de la Constitución federal; porque ésta se infringe cuando faltan las elecciones debiendo haberlas, ó cuando *se viola la Constitución particular de un Estado* en materia electoral.»

VII. La Constitución general garantiza que nadie sea molestado sin mandato de una autoridad, y de una autoridad competente. Ella abandona á las leyes secundarias federales ó de los Estados las condiciones de legitimidad que den autoridad á una persona ó personas, en lo no previsto por la misma Constitución; pero ella nunca permite, como nunca autoriza, nunca reconoce las autoridades de hecho, las que no pueden fundar su autoridad, derivar su autoridad de ley alguna. Permite á las leyes secundarias fijar con toda libertad los medios por que en derecho deba reputarse como legítima y verdadera una autoridad; mas nunca consiente autoridades contra las leyes, sobre las leyes, nacidas de una mera usurpacion. Y en no consentir eso, estriba la garantía del artículo 16. No es cierto que en un país en que la ley es la soberana, y no alguno de los poderes establecidos que son simples mandatarios del pueblo ó de la ley, no es cierto que el simple nombramiento baste para legitimar la jurisdiccion conferida á persona inhábil. La creacion de un funcionario público (dice Berriat Saint-Prix, ob. cit., nº 1205) es una cosa complexa: el análisis distingue por necesidad el nombramiento propiamente dicho, de la institucion. El uno es la designacion de la persona que desempeñará las funciones; la